
LA "NUEVA IZQUIERDA" EN
AMÉRICA LATINA:

DERECHOS HUMANOS,
PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
Y SOCIEDAD CIVIL



Woodrow Wilson
International
Center
for Scholars
Latin American Program



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI
TELLA



CELS
CENTRO DE ESTUDIOS
LEGALES Y SOCIALES

LA “NUEVA IZQUIERDA” EN
AMÉRICA LATINA:
DERECHOS HUMANOS,
PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
Y SOCIEDAD CIVIL

Compilado por

Cynthia J. Arnson
Ariel C. Armony
Catalina Smulovitz
Gastón Chillier
Enrique Peruzzotti
con Giselle Cohen

Enero 2009



Disponible en el Programa Latinoamericano
Woodrow Wilson International Center for Scholars
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20004-3027

www.wilsoncenter.org/lap

© 2009 Latin American Program

ISBN 1-933549-49-1

Cover photo: AFP/Getty Images©

ÍNDICE

Agradecimientos	5
Introducción	
<i>Ariel C. Armony y Cynthia J. Arnson</i>	7
“Accountability” por las violaciones del pasado	
Legado de las violaciones de derechos humanos: políticas de verdad, justicia, reparación y memoria en Chile, 1990-2007 <i>Elizabeth Lira</i>	29
La rendición de cuentas por las violaciones del pasado en Uruguay <i>Juan Faroppa Fontana</i>	46
El largo recorrido por Verdad y Justicia en Argentina <i>Horacio Verbitsky</i>	53
Los nuevos desafíos en la promoción de los derechos humanos	
Los nuevos derechos humanos en la Argentina reciente <i>Gustavo Maurino</i>	66
Uruguay y los nuevos desafíos en la promoción de los derechos humanos <i>Felipe Michelini</i>	79

La izquierda chilena y los desafíos en la promoción de los derechos humanos
Marcela Ríos Tobar **90**

Derechos humanos y la "nueva izquierda" en Brasil
Oscar Vilhena Vieira **96**

Participación política y relaciones Estado-sociedad civil

Bolivia
Sociedad civil y Estado bajo un populismo plebiscitario y autoritario
René Antonio Mayorga **106**

Representación, participación y democratización en las relaciones Estado- sociedad civil en Bolivia
Luis Tapia **115**

Venezuela
La esencia social de la revolución bolivariana en Venezuela: una mirada preliminar sobre sus fortalezas y debilidades
Ana María Sanjuán **129**

Nuevas formas de participación
Participación ciudadana en Argentina: entre la retórica política y la impotencia social
Carlos March **163**

La nueva izquierda, la crisis de representación y la participación social en América Latina
Leonardo Avritzer **177**

El Frente Amplio y la participación ciudadana (Uruguay 2005-2007)
Juan Pablo Luna **193**

Sociedad civil y políticas sociales

Sociedad civil y políticas sociales en Chile
Gonzalo Delamaza **211**

Sociedad civil y políticas sociales: El caso argentino en los años recientes
Guillermo Alonso **237**

La participación irrelevante: una evaluación del gobierno de Lula
Cláudio Gonçalves Couto **247**

La relación entre Estado y sociedad civil en el área de las políticas sociales en el primer gobierno de izquierda en Uruguay: ¿de la emergencia a un nuevo régimen de bienestar?
Gustavo De Armas **271**

Biografías de los autores **293**

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ARGENTINA: ENTRE LA RETÓRICA POLÍTICA Y LA IMPOTENCIA SOCIAL

CARLOS MARCH

Desde una mirada panorámica sobre la realidad argentina veremos que los dirigentes políticos que intentan ser definidos desde la nueva izquierda –los más osados– y desde el progresismo –los más moderados– se encuentran, muchos, bien lejos de la izquierda; varios, aún más lejos de ser nuevos; otros, bien distantes de ser progresistas; pero todos juntos, unidos –por acción u omisión– en el *regresismo* que llevó a la Argentina a una deuda externa de más de 150 mil millones de dólares, invertida en llevar a la pobreza al 60% de los habitantes del país. Pobres, indigentes, desocupados, marginados, excluidos e insularizados son los múltiples calificativos surgidos de la academia para identificar a quienes el líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, Héctor Toty Flores –lejos de tener la posibilidad de alcanzar una carrera de grado–, definió con un implacable poder de síntesis y aún mayor rigor social: “somos los desaparecidos de la democracia”.

Con este breve diagnóstico, sería muy difícil identificar a dirigentes de la nueva izquierda transitando con logros el camino de la equidad social, y a organizaciones sociales destacándose por su trabajo de inclusión en escala y de incidencia en políticas públicas. Podríamos caer en la fórmula reduccionista que sostiene que la sociedad no comprende a la izquierda y que la izquierda no interpreta a la sociedad. O que los dirigentes sociales tienen buena imagen porque nadie los conoce. Pero si ampliamos el radio de mirada y segmentamos a la Argentina en tres planos, el nacional y los provinciales y municipales, veremos que la relación entre los autodenominados gobiernos de la nueva izquierda y la autodenominada sociedad civil organizada no ha sido lineal, ni monolítica, ni siempre cínica por el lado de la política o eternamente frustrante por el lado de las organizaciones sociales. Y en términos de articulación

entre organizaciones y Estado hay un gran camino para recorrer en la construcción y administración de bienes públicos.

EL ESTADO NACIONAL: ENTRE EL CINISMO POLÍTICO Y LA PUERILIDAD SOCIAL

La relación entre dirigencia política y social en el plano nacional transita la brecha existente entre el marco de valores declamado y las lógicas de pensamiento que luego definen la manera práctica de gestionar la política pública. La brecha entre el dicho y el hecho es proporcional a los niveles de desconfianza ciudadana que generan las contradicciones y las promesas incumplidas. Y esa misma brecha hace que la interacción entre funcionarios o representantes y líderes sociales se defina sobre una agenda formal explicitada y casi en simultáneo, se diluya en la agenda oculta de los actores gubernamentales que detentan poder y definen las reglas de juego, que consolidan políticas sectoriales en detrimento del bien común.

El desarrollo social promovido desde un Estado nacional que maneja miles de millones de pesos para mitigar la pobreza y promover el desarrollo humano, está negando tres acciones básicas para combatir la pobreza estructural del país incluyendo activamente a las organizaciones sociales: niega acceso universal a los beneficios; niega políticas públicas que brinden soluciones estructurales y de escala; y niega información pública. Universalizar los planes sociales no consiste en que todos reciban el mismo beneficio, sino que se trata de que todos tengan el mismo acceso a los bienes públicos (educación, salud, seguridad), que luego, de acuerdo a cada situación particular, tendrá sus propias características. Por ejemplo, el sistema previsional garantiza el acceso universal pero los trabajadores jubilados cobran en proporción a los aportes realizados a lo largo de su vida laboral. Negar la universalización del acceso a la asistencia pública implica seguir sosteniendo el sistema de asistencialismo que dirigido desde el Estado, perpetúa el modelo de clientelismo político y de administración de la pobreza. La universalización del acceso es lo que asegura un abordaje en la escala que el flagelo de la pobreza requiere. Finalmente, el Estado nacional niega el acceso a información pública al no contar el país con una ley que la garantice. No poder contar con datos tan sensibles como los que facilitarían a miles de organizaciones de base

y decenas de entidades de apoyo mejorar sus impactos sobre las poblaciones más vulnerables o controlar la gestión pública desde información rigurosa, es un escenario que debilita el poder de la sociedad civil.

¿Cómo impactan estas definiciones gubernamentales en la participación de la sociedad civil? Sin duda negativamente. Negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia. Es imposible controlar la gestión pública sin manejar la misma información de la que disponen quienes toman decisiones. Y en este caso, se impide acceder a datos que podrían, en manos de organizaciones de la sociedad civil, complementar políticas públicas y mejorar la inversión social privada. Impedir el acceso universal a los beneficios por parte de los ciudadanos aumenta el poder discrecional del Estado, y fomenta la captura de los planes sociales por parte del aparato y los punteros políticos, impidiendo a las organizaciones de la sociedad civil monitorear la transparencia de la aplicación presupuestaria, y controlar el financiamiento indebido de la actividad política. Y a esto debe sumársele la degradación que sufren los sectores más vulnerables, que además de ser cautivos de la pobreza, se convierten en rehenes del puntero político que maneja los planes. Además, destruye la dignidad del beneficiario al tener que mendigar un apoyo, convirtiendo a un sujeto de derecho en un objeto de clientelismo; debilita el tejido social al profundizar las inequidades manipulando políticas sectoriales que deberían universalizar la equidad; y fractura a los movimientos sociales, al otorgárseles desde el gobierno la distribución de planes de acuerdo al apoyo que le brinden. Por último, apoyar situaciones puntuales desde el Estado, algo que pueden hacer perfectamente las organizaciones de la sociedad civil, genera superposición de políticas públicas cuando podrían existir complementariedades. Las políticas públicas para impactar en las situaciones de pobreza se diseñan para mitigar el problema, no para solucionarlo.

Pero estas inconsistencias y contradicciones no sólo se limitan al plano estatal. Los partidos políticos en el plano nacional, que de acuerdo a la Constitución son las instituciones base de la democracia, ya no cumplen el rol de construir ideología o acordar marcos de valores. No buscan ciudadanos militantes ni afiliados partidarios; basta con fiscales electorales. Alcanza con una alianza o frente o coalición electoral o UTE (Unión Transitoria Electoral) para ganar una elección o convertirse en líderes de la oposición. Y en estas UTE's ni siquiera son necesarias las ideologías o

los valores: alcanza con acordar intereses. Por lo tanto, la nueva izquierda o progresismo no es hoy una ideología concreta ni un marco de valores en común; es la sumatoria de intereses individuales expresados, no en la construcción de un diálogo que una en la diversidad, sino en numerosos monólogos paralelos que conforman un rejunte circunstancial de incentivos. No los unen las reformas a futuro para el bien común desde un diseño institucional, sino las deformaciones de una coyuntura que brinda ocasiones para ocupar cargos cortoplacistas. El espacio que la nueva izquierda ocupa es el que surge de sucesos y no el que se sostiene en procesos. Y frente a este espectáculo que protagonizan los políticos, la dirigencia de la sociedad civil no entra en la escena de la política por la puerta grande, ni siquiera por la ventana de la oportunidad. Ingresa por la chimenea del oportunismo. Oportunismo que no debe ser entendido desde el aprovechamiento de una circunstancia para sacar provecho propio –en la mayoría de los casos–, sino desde la óptica de aprovechar un contexto o un espacio sobre el cual el dirigente social no posee el control ni territorial, ni espacial, ni funcional, ni grupal. Y entonces los dirigentes de la sociedad civil que se atreven a dar el salto de las aguas de la sociedad civil a la arena de la política, corren tres riesgos: rifar el capital social construido (que obviamente incluye a las organizaciones creadas); perder el poder simbólico desarrollado; y anular la capacidad de acción desde lo impensable. La llegada a la política de los movimientos sociales por la chimenea de la nueva izquierda o el progresismo, daría la sensación de que no se logra desde estrategias propias, sino que parasita estrategias ajenas. Y entonces deben sumarse otros tres riesgos: absorber en el cuerpo propio los mismos vicios que enferman al cuerpo parasitado; tomar el rumbo que siga el cuerpo que se parasitó; terminar mimetizado con el cuerpo parasitado, lo que genera la pérdida de identidad, o bien porque se diluye la propia, o bien porque se valida la ajena.

En las elecciones presidenciales del 2007, tal vez como nunca antes en estos veinticinco años de democracia ininterrumpida, varios líderes de la sociedad civil decidieron apoyar a alguna expresión política y otros postularse a cargos electivos desde diversas expresiones electorales en los distintos niveles del Estado. Esto significa una nueva apuesta para que la agenda y los valores de los líderes sociales puedan encontrar expresión e intérpretes en las instituciones de la democracia. El tiempo enfrentará a

estos referentes sociales, algunos ya consagrados representantes del pueblo, al gran desafío de transformar al Estado desde adentro.

Para ello, si quieren tener éxito y no diluirse en el intento, quienes aspiren a reconstruir el marco de valores que rige en el Estado –principalmente el nacional–, ofreciéndose como recambio de lo viejo y alternancia de lo eterno, deberán articularse en redes, en plataformas de articulación que les permita contrarrestar las alianzas tejidas por aquellos que se apropian de lo público. Los intentos de aquellos que lo hicieron solos, aislados, por lo general terminaron dilapidando el capital social y el poder simbólico construido durante años de trabajo social o cívico. Incluso, cuando pudieron impulsar herramientas y agendas reclamadas desde la sociedad civil, como el caso de Marta Oyhanarte, subsecretaria de los gobiernos del matrimonio Kirchner y ex legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que fue una de las primeras referentes sociales que cruzó a la vereda de la política. Pero lo hizo sola. Y sola perdió el capital simbólico de referente cívica y luchadora social, diluido en las lógicas de la permanencia en el poder de un cargo público. Pero hay que destacar que Oyhanarte, que pese a ya no ser percibida como parte de la sociedad civil sino como un miembro del mundo de la política, continuó impulsando la agenda de la sociedad civil y logró plasmarla en políticas públicas, seguramente con más convicción y eficacia que muchos líderes que siguieron el camino de la permanencia en la sociedad civil. Y no fueron acciones menores: la ley de acceso a la información pública en la ciudad de Buenos Aires y el decreto 1172 del Poder Ejecutivo Nacional que establece una serie de medidas y herramientas de transparencia, como regular el acceso a la información, abrir las agendas de los ministros y secretarios frente a acciones de lobby, o dar carácter de públicas a las reuniones de los directorios de los entes reguladores de servicios públicos, son obras de su gestión. Y en muchas de sus iniciativas como miembro del Poder Ejecutivo, incorporó a organizaciones de la sociedad civil.

Pero también funcionaron redes de organizaciones sociales que pudieron incidir con éxito en políticas públicas sin correrse del ámbito de la sociedad civil, como la coalición Una Corte para la Democracia, integrada por seis organizaciones que lograron modificar el sistema de selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, transparentando el proceso y reduciendo la discrecionalidad del presidente de la Nación. En la actualidad, cada vez que el Poder Ejecutivo propone un candidato,

todos los antecedentes están disponibles en la página web del Ministerio de Justicia para que cualquier ciudadano u organización haga sus observaciones. Y luego, en la instancia de la Cámara de Senadores, se puede acercar preguntas para que le sean formuladas a los candidatos en la audiencia pública previa al acuerdo.

LAS PROVINCIAS: ENTRE EL FEUDALISMO POLÍTICO Y EL EXILIO SOCIAL

El escenario provincial es donde más crudamente se comprueba que la gran mayoría de la dirigencia política se dedica a administrar pobreza, delito e ignorancia, a la vez que consolida el centralismo, a veces camuflado en un discurso federalista.

En el año 2004, el gobierno nacional no pudo disimular más la anacrónica tiranía del matrimonio Juárez en la provincia de Santiago del Estero y dispuso la intervención federal, designando a Pablo Lanusse como interventor. Lanusse, que no provenía de la política tradicional sino de una carrera judicial intachable que lo había convertido en referente de la institucionalidad, se encontró con un panorama desolador. El caudillo Carlos Juárez y su esposa Nina eran la expresión más bochornosa de lo que significa someter a una provincia en base a la administración de pobreza, delito e ignorancia. Cuando llegó Lanusse a Santiago del Estero, uno de los distritos más pobres del país, encontró que la provincia tenía depositados en plazos fijos quinientos millones de pesos – más de ciento sesenta millones de dólares-. Esta plata invertida en el circuito financiero obviamente no era invertida en planes de asistencia a la pobreza, en salud o en educación.

Al mismo tiempo, se descubrió que las estadísticas de desnutrición y mortalidad infantil estaban alteradas, pues los médicos de los hospitales públicos tenían prohibido registrar los casos que atendían bajo amenaza de despido. Es decir, mientras los chicos se morían de hambre, el gobierno invertía dinero público en plazos fijos, administrando pobreza y sacrificando el acceso a las posibilidades de cubrir las necesidades básicas de gran parte de la población. La administración de delito por parte del gobierno provincial no era menos descarado: a través de un sistema parapolicial, se había montado una red de espionaje y represión que respondía directamente al matrimonio Juárez. La intervención encontró miles

de fichas que daban cuenta de costumbres y vínculos de los pobladores santiagueños que podían tener posiciones de cuestionamiento a la tiranía de los Juárez. Este aparato estaba complementado por un sistema judicial ligado al régimen que lejos estaba de defender los derechos de los ciudadanos. En las reuniones públicas en la capital de Santiago del Estero nadie se atrevía a preguntar en público algo que pudiera incomodar al matrimonio gobernante. Finalmente, la administración de ignorancia, se reflejaba en el desmantelamiento del sistema de educación pública, con escasa inversión edilicia y en capacitación decente, con poblaciones en los montes santiagueños que tenían que hacer decenas de kilómetros hasta llegar a la escuela más cercana, y con edificios escolares en condiciones de derrumbe en la propia capital provincial.

Este esquema de gestión gubernamental en las provincias, terminaba de institucionalizarse y eternizarse en dos acciones bien definidas: la complicidad con el centralismo porteño y la posibilidad de reelección indefinida de gobernador. La concepción de centralismo, que confluye desde las propias provincias en Buenos Aires, tiene su nacimiento en el centralismo que hacen valer las ciudades más fuertes de cada provincia en detrimento de las menos poderosas. De esta manera, los dirigentes políticos provinciales que asumen roles en la política nacional, terminan alimentando las lógicas y prácticas de la centralización a nivel país, sin construir transformaciones que apunten a propuestas federales y descentralizadas. Y al mismo tiempo, los funcionarios federales que ocupan cargos en las provincias, que podrían plantear escenarios favorables al quiebre del sistema feudal provincial, como son agentes de los propios gobiernos provinciales, no hacen otra cosa que avalarlos. Si a ello le sumamos constituciones provinciales que permiten reelecciones indefinidas de gobernadores, el sistema lejos de impedir la institución de caudillos, la eterniza. Para dar cuenta de la proyección que tiene en la política nacional la consolidación de los sistemas feudales en las provincias, de los últimos cinco presidentes justicialistas en los últimos veinticinco años, cuatro provienen de provincias que contemplan en sus constituciones la reelección indefinida de gobernadores: Carlos Menem (La Rioja); Adolfo Rodríguez Saá (San Luis); Néstor y Cristina Kirchner (Santa Cruz).

Este esquema, que en el caso del matrimonio Juárez fue burdo hasta la impunidad –como antes lo había sido en Catamarca la dinastía de los Saadi-, en la mayoría de las provincias argentinas se *aggiorna* en

función de la impronta de cada caudillo, pero es sustancialmente invariable la fórmula aplicada: administración de pobreza más administración de delito más administración de ignorancia menos institucionalidad y federalismo.

Esto deja claro por qué, recién en las elecciones de 2007, después de casi veinticinco años de instalada la democracia, la Argentina cuenta hoy con un gobierno provincial de extracción izquierdista, como lo es el socialista Hermes Binner, electo gobernador en Santa Fe, y con un gobierno de orientación progresista, como la electa gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.

Ambos están incorporando a su gestión referentes locales de la sociedad civil, pero tendremos que esperar que pase el tiempo para poder evaluar si estos escenarios de la nueva izquierda o el nuevo progresismo, generan espacios de participación ciudadana desde donde puedan generarse construcciones innovadoras, además de las ya existentes e imprescindibles estructuras sociales de resistencia a los modelos autoritarios imperantes en la mayoría de las provincias argentinas.

LOS MUNICIPIOS: ENTRE LA PUERTA DE ENTRADA A LA POLÍTICA Y LA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LO SOCIAL

El ámbito municipal es el nivel estatal donde más oportunidades aparecen para concretar la participación ciudadana en acciones de incidencia concreta y achicar la brecha entre las organizaciones de la sociedad civil y las políticas de gobierno.

La municipalidad es la escala de Estado con la que interactúa el ciudadano, porque es la encargada de la prestación de servicios básicos e inmediatos vinculados en forma directa a su calidad de vida. Por otro lado, los cientos de municipios argentinos cuentan con una gran variedad de intendentes que poseen sus propias particularidades, lo que no implica que algunos de los vicios descritos en los planos nacional y provinciales puedan estar presentes, pero también, esta diversidad de improntas de liderazgo y de conducción de la política, abre la posibilidad de generar interrelaciones con las organizaciones de la sociedad civil.

Existen interesantes ejemplos de nuevos dirigentes que abren a la participación ciudadana herramientas y espacios que terminan institucionalizándose en el plano de sus municipalidades. A riesgo de ser injusto y

discrecional, podemos mencionar a los municipios de Rosario y Morón como dos claros ejemplos de gestiones municipales que podrían encuadrarse en la nueva izquierda, que han servido de puerta de entrada a la política de la sociedad civil, y una ventana de oportunidades para la implementación de acciones de impacto social surgidas desde las organizaciones sociales y las empresas.

Ambos municipios han institucionalizado mecanismos de participación como presupuestos participativos, audiencias públicas o cuentan con herramientas que garantizan el acceso a la información o crearon espacios en la estructura municipal de atención directa a vecinos u oficinas anticorrupción.

ALGUNAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA

Puede afirmarse que desde un punto de vista estructural e integral, en Argentina no existe una redefinición de la relación entre sociedad civil organizada y Estado. En términos de transformación estructural, la sociedad civil tiene presencia –podemos debatir si llega a convertirse en influencia– sobre algunas acciones de mejora de la calidad de la democracia, no gracias sino a pesar de los gobernantes y dirigentes.

Sí existen, en los diversos planos del Estado –sobre todo el municipal–, casos puntuales de incidencia o influencia en la definición de políticas públicas en temas ligados a derechos humanos, los cambios positivos en la selección y composición de la Corte Suprema de Justicia, la incorporación desarticulada de referentes de la sociedad civil a diversos organismos del Estado, o la implementación de algunas herramientas de alcance limitado que apuntan a reducir el manejo discrecional de los recursos del Estado, como los incorporados al decreto 1172.

Y podemos encontrar algunos aspectos embrionarios de participación política de la sociedad civil argentina, que pueden resultar a largo plazo un buen ejemplo de renovación de dirigencia y de transformación de sistemas de gestión, como ser:

Articular a los actores emergentes:

Si bien el modelo de apropiación del Estado todavía está asentado sobre bases sólidas, siempre existen brechas por donde se filtran oportunidades

y actores para defender la construcción de lo público y promover el cambio. Identificar esas brechas y esos actores que ya están haciendo gestión pública para poner al Estado al servicio del bien común y articularlos en un marco de valores compartido, es un gran paso que puede dar la sociedad civil en pos de transformar el modelo. La captura del Estado no se genera desde individuos aislados sino a partir de actores articulados. Convertir a la sociedad civil en una plataforma de articulación de políticos y funcionarios públicos de los tres poderes que compartan valores e información, es un paso significativo en la búsqueda de transformación del modelo. En este sentido, la Red de Acción Política (RAP), que reúne a un centenar de políticos para promover la formación y la construcción de vínculos, es una estrategia interesante de la sociedad civil argentina que permite conocer las lógicas de quienes intentan operar el sistema de manera diferente a los políticos tradicionales, y al mismo tiempo, promueven la construcción de vínculos entre dirigentes políticos de diferentes partidos. Además, al ser un escenario construido desde una organización social, permite a los dirigentes políticos acercarse a la agenda de la sociedad civil y tomar contacto con sus referentes.

Promover la democracia participativa y de articulación:

Hay tres estrategias que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil que pueden definirse como necesarias y que crean las condiciones de factibilidad para alcanzar cambios en el mediano plazo: controlar la discrecionalidad del manejo del poder; involucrar a la empresa en la construcción de institucionalidad; y promover la democracia participativa en el plano local y provincial. Para ello la sociedad civil ha descubierto cuatro conceptos desde donde poder influir: poder difuso, que consiste en proyectar en las capacidades de acción de aliados el limitado poder real que posee una organización de la sociedad civil para que no pueda ser neutralizada; blanco fijo y blanco móvil, que pasa por cambiar la escala de una acción de incidencia para que el poder local no la anule ni ponga en riesgo a la organización; inteligencia emocional, que es la condición indispensable para poder consolidar espacios colectivos, pues a partir de ella se establecen conductas de resignación de agendas particulares para lograr la estrategia común y las síntesis de las contradicciones que enmarcan las acciones colectivas; administración de intangibles, que es la habilidad que le permite a las organizaciones de la

sociedad civil hacer mucho con muy poco. Un ejemplo de gobierno municipal que día tras día se consolida en la promoción de transparencia y participación ciudadana es la administración que encabeza Martín Sabbatella en la localidad de Morón, un municipio del conurbano bonaerense de 380 mil habitantes. En el año 2000, Sabbatella promovió junto a la fundación Poder Ciudadano y Transparency International el programa Contrataciones Transparentes para discutir públicamente el pliego licitatorio para adjudicar el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Mediante una audiencia pública donde participaron cerca de cuatrocientas personas, se modificó el cincuenta por ciento del pliego de condiciones. Luego, el monitoreo de Poder Ciudadano, enmarcado en un pacto de integridad firmado por el municipio y las cinco empresas que participaron de la licitación pública, permitió generar un proceso transparente que ahorró al municipio de Morón en cuatro años de contrato, trece millones de dólares. A partir de esta primera intervención de la sociedad civil, Sabbatella involucró a las organizaciones sociales en la mayoría de sus políticas públicas de alto impacto, como derechos humanos, la creación del Defensor del Pueblo, la apertura de la Oficina Anticorrupción y una serie de normativas y acciones para transparentar su gobierno. Otra experiencia de democracia participativa ligada a los dineros públicos, pero esta vez impulsada por una coalición de treinta organizaciones denominada Carta Popular, promovió ante los miembros del Concejo Deliberante en el municipio bonaerense de San Miguel, la ordenanza para poner en marcha el presupuesto participativo. La norma, aprobada por unanimidad, hoy permite que los vecinos definan prioridades en la aplicación presupuestaria por un total de tres millones de dólares, interactuando con los concejales y el gobierno municipal.

Dejar de construirse como sector:

En sus intentos de construirse como un actor social, las organizaciones se constituyeron como sector y diseñaron su operación desde esa lógica. Considerarse sector implica impulsar políticas sectoriales y conformar espacios propios para cobrar existencia. Sin embargo, cuesta encontrar elementos concretos que nos permitan afirmar que las organizaciones han logrado consolidar un sector social. Los dos sectores claramente identificables son el mercado, que concentra poder económico y financiero, y el Estado, que además reúne poder formal. No parecería haber lugar para

un tercer sector. Sí en cambio, existe un territorio poco explorado, que puede recorrerse desde las fortalezas de las organizaciones de la sociedad civil y no desde sus carencias. Ese territorio está conformado por las numerosas brechas existentes entre el Estado y el mercado y hacia el interior de ambos espacios. Y para operar desde las brechas no se necesita poder formal sino poder simbólico; no se requiere capital económico sino capital social; no se requieren recursos financieros sino recursos intangibles. Es un error construir lo que no hay para transformar lo que hay porque simplemente no es necesario. Es inventariar lo que hay, identificar las brechas y definir la mejor estrategia para transitarla. Y hay buenos ejemplos de actores sociales que han recorrido la brecha, generado impacto desde las organizaciones sociales en alianza con empresas, identificado nuevos escenarios y mutado de roles para transitar las brechas que ofrecía el Estado, por ejemplo, incorporándose a la Cámara de Diputados de la Nación como el electo referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza (MTDLM), Héctor “Toty” Flores. Flores, líder del movimiento piquetero MTDLM, como forma de protesta hacia el sistema que lo había marginado del trabajo, decidió no votar en las elecciones como una forma de expresar su enojo. Sin embargo, en el 2002 tomó la decisión de consolidar una cooperativa para volver a la cultura del trabajo. Y desde allí, no sólo desarrolló emprendimientos productivos como un taller de costura y una panadería en alianza con empresarios, sino que en paralelo, promovió entre los miembros de su organización acciones ligadas a la defensa de derechos y construcción de ciudadanía. Y a partir de allí, no sólo se reconcilió con el sistema democrático y comenzó a votar nuevamente, sino que en las elecciones del año 2007 resultó electo diputado nacional. Y como una de sus primeras acciones como legislador, está elaborando junto a otros colegas diputados y organizaciones sociales, un proyecto para crear dentro del Congreso Nacional una oficina para la sociedad civil.

El cuarto poder, la universidad pública: Los procesos de transformación en sociedades tan complejas como las modernas, tan débiles como las latinoamericanas, y tan pragmáticas como la argentina, obliga a promover articulaciones sociales con todas las instituciones del Estado con las que sea posible. Una de ellas, es la universidad pública. Y puntualmente las áreas de extensión universitaria, por lo general, denigradas frente a la priorización de las áreas de investigación. Un excelente ejemplo de una

iniciativa de construcción de ciudadanía es el programa de Extensionismo Jurídico, operado desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. El programa consiste en capacitar a personas de poblaciones vulnerables durante ocho meses. En ese lapso, reciben nociones básicas sobre derecho y al concluir el entrenamiento, deben montar consultorios de extensionismo jurídico en sus barrios. Este programa ya tiene cinco promociones de egresados y diez consultorios jurídicos funcionando, en una clara articulación entre universidad estatal y organizaciones sociales al servicio del conocimiento aplicado.

En síntesis, Argentina ofrece una democracia consolidada desde lo formal y endeble desde sus prácticas, sin espacios políticos definidos desde lo ideológico, donde los operadores del modelo han consolidado su operación en sólidas redes de captura del Estado; por otro lado existe una sociedad civil que instala temas, sostienen un cierto grado de contención social, tiene muy baja incidencia en una transformación en términos de escala, pero que poco a poco va consolidando e institucionalizando en interacción con el Estado y los gobiernos transformación social y participación ciudadana más allá del voto.

Es sabido que no puede construirse lo nuevo con los arquitectos de lo viejo, sobre todo cuando lo viejo se dedicó a demoler y no a construir. Es por ello que los dirigentes de la sociedad civil tienen dos desafíos: recuperar la institucionalidad perdida interpelando al poder y al mismo tiempo, preparar a nuevos actores para disputarlo.